

Latin America, 20 diciembre 2010 - Los colectivos, organizaciones y personas abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por la situación actual que coloca a los adolescentes como los principales responsables de la inseguridad que aseguran se vive en nuestro país. Entendemos que las políticas de mano dura que se están proponiendo no significan una respuesta adecuada por las siguientes razones:

1. Hasta la fecha ningún dato válido de fuente confiable, realizado con criterios medianamente serios y de calidad técnica avala el supuesto auge de conductas delictivas por parte de adolescentes. Sin embargo lo que sí está avalado por abundantes cifras y fuentes indiscutibles son los indicadores negativos que afectan a la infancia y adolescentes uruguayos. La violencia amplificada en los medios de comunicación que se vale del dolor de las victimas expuesto impúdicamente se centra exclusivamente en la infancia y adolescencia como únicos causantes de la violencia. Sin embargo los datos y las investigaciones hasta la fecha realizadas confirman una cuestión irrefutable: son los niños y adolescentes las principales victimas de la violencia.
2. Ni la baja de edad de imputabilidad, ni la preservación de los antecedentes, ni el incremento de las penas mejoran el estado de la seguridad de las personas, no reducen el temor, ni aportan el clima social adecuado, por el contrario generan mayor exclusión de los adolescentes, construyendo la ilusión de solucionar el problema. En concreto algunos actores políticos apuestan a presuntas soluciones, que solo producirá mas gente presa a edades más tempranas y un aumento de la violencia tal como ocurrió en todos los países que se implementaron iguales medidas.
3. En este contexto, que coloca en un puñado de adolescentes del país la responsabilidad de los problemas de seguridad, se abona un terreno fértil para un discurso de mano dura contra lo mejor que se ha logrado en la lucha por los derechos de la niñez y se ha consagrado en diferentes textos normativos: las garantías individuales y la limitación de la coacción estatal. La defensa irrestricta de los derechos y garantías en un estado democrático de derecho debe ser inclusiva de todos los ciudadanos sin claudicaciones, abandonar ese principio para un sector específico de la sociedad alienta el riesgo de recorrer el ya conocido camino de mayores y generalizadas vulneraciones de derechos y garantías para todos en el futuro próximo.
4. Todos los objetivos que se pretenden lograr con las modificaciones legales e institucionales planteadas y objeto de consideración parlamentaria, pueden ser alcanzados mediante la cabal aplicación de las leyes vigentes, el correcto funcionamiento de las instituciones existentes y el imprescindible compromiso y clima de convivencia entre todos los ciudadanos que las hagan sustentables.
5. El actual debate parlamentario jerarquizaría a sus miembros y evidenciaría una cultura política que en múltiples instancias ha sido orgullo para la inmensa mayoría de los uruguayos, de obtener como resultado iniciativas de consenso político que permitan interpretar en los hechos el precepto constitucional de que "... en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar..." y proponiendo mecanismos racionales y modernos que atiendan

efectivamente a la integración social de los menos favorecidos, armonizando las mejores tradiciones humanitarias del país con las efectivas soluciones al problema.

6-Las deficiencias estructurales de las instituciones encargadas de llevar adelante las sanciones privativas de libertad son elocuentes. Encierro y ocio compulsivo, deterioro edilicio, malos tratos, tortura y muertes en los centros, son una constante de los últimos 20 años. Poco se ha avanzado para hacer de estos sitios lugares donde la violencia se reduzca en términos significativos. Lo anterior sumado a la ausencia de un abanico amplio y diverso de penas no privativas de libertad contribuye a generar una falsa conciencia de impunidad de los adolescentes en sus actos. Todo evidencia grandes deficiencias institucionales del mundo adulto en la respuesta a una problemática compleja y no como se apunta hasta ahora de responsabilidad pura y exclusivamente de los niños y adolescentes. Por lo que el celo que deben poner las instituciones encargadas de velar por los derechos del niño debe profundizarse en esta temática.

7- Trabajar a su vez con la comunidad en el necesario cambio cultural de las concepciones dominantes sobre el delito y las acciones descritas por la ley como infracciones a la ley penal realizadas por adolescentes es una responsabilidad ineludible en este escenario. Debe avanzarse también en este terreno a través de mecanismos de prevención en primer término y de la composición de los conflictos desde perspectivas mas amplias y diversas que las simplemente punitivas. Ello sin duda contribuirá en los tiempos futuros a que las discusiones y las eventuales soluciones sean otras, nuevas y diferentes a la que ha predominado hasta la fecha que se centran exclusivamente en nuevas leyes penales y más centros de reclusión.